



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, veintidós de julio de dos mil veinte

S16-189

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN
Demandante:	ROSA ELENA TORRES
Demandados:	AURA ROSA CORREA EUSE y MARÍA DEL CARMEN CORREA EUSE
Radicado No.:	05001-31-05-019-2015-00283-01
Tema:	prestaciones, despido indirecto, aportes al régimen pensional
Decisión:	CONFIRMA CONDENA

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por la demandante dentro del proceso ordinario laboral de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 expedido el 4 de junio de 2020, en consonancia con los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 18** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Pretende la demandante que tras la declararse la existencia de un contrato de trabajo con las demandadas entre el 10 de junio de 1989 y el 22 de octubre de 2014, se condene a las señoras AURA y CARMEN CORREA EUSE respectivamente, a reconocer y pagar la indemnización por despido indirecto, así como las prestaciones sociales y vacaciones causadas por todo el tiempo de servicio, los aportes al sistema de seguridad social, la pensión sanción conforme lo establecido en el art. 267 del CST y art. 133 de la Ley 100 de 1993, la sanción moratoria prevista en el art. 65 del CST, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

Que prestó sus servicios como empleada de servicio doméstico, correspondiéndole laborar 3 veces por semana, percibiendo \$30.000 por día. Aduce que renunció toda vez que no la afiliaron a seguridad social, configurándose un despido indirecto, aunado a que no le han pagado los haberes que deprecia.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtieron las demandadas el derecho pretendido e indicaron frente a los hechos que eran ciertos los relativos al extremo final, el salario, el oficio desempeñado y la falta de afiliación a la seguridad social, dado que a voces de la actora, era beneficiaria de su cónyuge o del SISBEN, donde consideraba que perdería los beneficios por antigüedad. Como extremo inicial refieren el año 2007, aclarando que el vínculo perduró por espacio de 6 o 7 años, al término de los cuales abandonó el cargo, no medió renuncia, habiendo recibido la correspondiente liquidación al finalizar cada año, toda vez que renunciaba y retornaba en enero, laborando únicamente un día por semana, que libremente escogía, retirándose en el momento en que terminara, lo que podía suceder con antelación a la culminación de la jornada de 8 horas. Aclaran que la última liquidación se consignó a órdenes de un juzgado, pues ella no la quiso recibir.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 11 de julio de 2016 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, se **CONDENÓ** a las demandadas a pagar los aportes al régimen pensional a la administradora donde estuviera afiliada la demandante por el período laborado entre el 1 de enero de 2007 y el 22 de octubre de 2014, previo cálculo actuarial realizado por la correspondiente entidad. **ABSOLVIÓ** a las accionadas de las restantes pretensiones incoadas en su contra, a quienes condenó en costas fijando como agencias en derecho la suma de 3 SMLMV.

Dentro del término concedido por la ley, la parte actora interpuso y sustentó recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL JUEZ

- Que al contestar la demanda NO se controvertió la existencia de la relación laboral, únicamente el extremo inicial. De un lado, las llamadas a juicio aducían que dicho vínculo surgió en el año 2007, debiéndose entender 1 de enero, de otro lado, la demandante argüía que la relación databa de 1989, sin haber cumplido la carga de la prueba que en este aspecto le asistía toda vez que los testigos allegados eran de oídas, NO conocieron de manera directa la prestación personal del servicio, nunca visitaron el domicilio, ni siquiera conocían en nombre de las señoras para las cuales la accionante trabajaba, por lo que debía atender a lo confesado, no sólo frente al inicio, sino además respecto del número de días laborado, siendo uno por semana, y no los tres indicados en la demanda.
- Que el extremo final lo fue el día 22 de octubre de 2014, pues había coincidencia entre las partes, aspecto frente al cual la juez consideró que era contrato permanente e ininterrumpido al no acreditarse la existencia de una renuncia al finalizar cada año, y como era verbal debía entenderse a término indefinido.
- En cuanto a los derechos laborales, precisó que se encontraban prescritos los causados con antelación al 11 de diciembre de 2011, es decir, tres años antes de la reclamación realizada ante el Ministerio de Trabajo, excepto respecto de las cesantías, exigibles a la terminación del contrato. Aclarado este punto, y teniendo en cuenta una remuneración de \$30.000 por día trabajado, analizó cada uno de los recibos allegados que daban cuenta de los pagos realizados a título de prestaciones durante cada anualidad, encontrando que el dinero entregado en su totalidad era un monto superior al causado por concepto de cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones, declarando la prosperidad de la compensación. Puntualizo que de acuerdo a lo normado por el art. 306 del CST, vigente para esa época, la demandante no tenía derecho a prima de servicios, dado que se desempeñaba como empleada de servicio doméstico.
- Respecto del despido indirecto, en síntesis, señaló que la actora no demostró que renunció por causas imputables al empleador, mucho menos que en ese momento hubiese expuesto los motivos de la misma.
- Tampoco reconoció la sanción moratoria, al considerar que las empleadoras actuaron de buena fe y cumplieron con las obligaciones causadas durante cada año de servicio, precisando que la última liquidación se canceló en forma tardía por la renuencia de la actora de recibirla.
- Finalmente, frente a la pensión sanción, la juez señaló que la falta de afiliación o la afiliación tardía, no siempre acarrea la obligación de asumir directamente la carga de la prestación, por lo que de acuerdo a lo previsto en el art. 9 de la Ley 797 de 2003, las empleadoras

debían pagar el capital correspondiente al cálculo actuarial frente a las cotizaciones dejadas de realizar al régimen pensional durante el lapso que perduró el vínculo.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN PARTE ACTORA

- Adujo que la contestación de la demanda daba cuenta de la existencia de una relación laboral hasta el 2014 de una persona sin estudios, trabajando con dos profesionales en derecho, debiéndose tener en cuenta que las liquidaciones fueron realizadas por persona distinta a las firmantes, aunado a que no reposaban las correspondientes a los años 2009 y 2011.
- Que de la prueba testimonial se desprendía que la actora laboraba 3 días por semana y no uno, dicho que únicamente fue contrarrestado con la negativa de las accionadas, sin que el fallo se basara en algo diferente a la contestación de la demanda, resultándole particularmente extraño que las señoras Aura y Carmen aceptaran que conocían a la demandante desde el año 1989 pero adujeran que sólo comenzó a laborar con ellas desde el 2007, pese a que la actora era una persona cuya actividad laboral siempre fue dedicarse a los servicios domésticos.
- Frente al despido indirecto, recalca que en el interrogatorio de parte se dijo que verbalmente se había manifestado el motivo de la terminación, sin que la norma exigiera que esa notificación tenía que constar por escrito, máxime si la demandante, conforme sus firmas, era una persona que no sabía casi escribir, por lo que no era dable hacerle tal exigencia, aunado a que tampoco tenía ninguna preparación jurídica, habiendo estudiado hasta segundo de primaria, carga de la prueba que no le incumbía, siendo procedente la indemnización.
- Que debía tenerse en cuenta que conforme el acervo probatorio, la actora no laboró para persona disímil a las demandadas, testigos que por demás conocían a la demandante de muchos años atrás laborando, por lo que el extremo inicial no data del año 2007 como dijo la juez.
- Discrepa de la compensación declarada por la juez frente a los valores pagados, pues NO era dable entregarle directamente a la trabajadora las cesantías, toda vez que el contrato no se suspendía porque aquella saliera en diciembre y entrara en enero, cesantías que debieron ser consignadas en un fondo, por lo que el mal pago de las mismas implicaban una sanción y consecuentemente una indemnización moratoria, pues si dos personas versadas en el derecho confesaban en la contestación que la persona trabajaba sin afiliarla al sistema de seguridad social, estaba probada la mala fe, habiéndose omitido un pronunciamiento por parte de la juez respecto del sistema de salud y riesgos profesionales.

Valga aclarar en este punto que el apoderado de las demandadas presentó oposición respecto del que a su juicio constituía un valor exagerado de las **costas procesales**. Sin embargo, ha de precisarse que no es esta la oportunidad procesal para ventilar la inconformidad relacionada con la **tasación de las agencias en derecho**. Considera la Sala que si bien la Ley 1395 de 2010 incluyó la posibilidad de liquidar las agencias en derecho en la sentencia, dicho artículo fue derogado por el artículo 366 del C.G. del P. que estableció que *“Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obediencia a lo dispuesto por el superior...”*, y en el numeral 5 de dicho artículo se indica que *“La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas”*, lo que significa que la oportunidad para interponer el recurso de apelación contra la liquidación de agencias en derecho no es otra que una vez notificado el auto de aprobación de las mismas. En consecuencia, como este punto del recurso se refiere a asuntos que deben ser tratados en su debida oportunidad procesal, esta Sala **SE ABSTIENE DE CONOCER sobre la apelación a la liquidación de las costas y agencias en derecho**.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Atendiendo a los argumentos señalados en el recurso de alzada, la controversia gira en torno a determinar:

- a) Cuál es el extremo inicial de la relación laboral, estableciendo además si de los medios de prueba allegados logra desprenderse que la demandante laboraba tres días por semanas. Establecidos estos dos puntos, se revisará lo atinente a la procedencia de la sanción moratoria regulada en el art. 65 del CST, toda vez que la a quo consideró que ningún emolumento se adeudaba, examinando además la incidencia que en este aspecto tiene no sólo el haberle entregado directamente a la trabajadora las cesantías causadas cada año, sino además el acreditarse o no la existencia de la liquidación de las prestaciones durante las anualidades 2009 y 2011, analizando además lo atinente a la mala fe que se predica de las demandadas con ocasión de su formación profesional.
- b) Posteriormente se analizará lo atinente al despido indirecto y consecuentemente la procedencia de dicha indemnización.

- c) Finalmente se estudiará la inconformidad relacionada con la pretensión encaminada a obtener el pago de los aportes correspondientes al sistema de salud y riesgos laborales.

4. CONSIDERACIONES

Sea lo primero señalar, conforme lo destacó la juez en primera instancia, que no existe discusión alguna en los hechos relacionados con la vinculación laboral que unió a las partes del presente litigio, el extremo final, 22 de octubre de 2014, el cargo desempeñado por la trabajadora como empleada del servicio doméstico y la remuneración percibida, siendo tal \$30.000 por día laborado. Ello se desprende con facilidad de la lectura de la contestación.

Son pues otros los puntos en que se centra la discusión, siendo el primero de ellos el extremo inicial y el número de días laborados por semana. Mientras la parte actora aduce que el vínculo surgió desde 1989 y que eran tres los días que trabajaba para las demandadas, las señoras Aura Rosa y María del Carmen Correa Eusse sostienen que sólo desde el año 2007 tuvieron un vínculo con la actora, y que si bien la conocían de años atrás, concretamente desde 1989, conforme lo aceptado en el interrogatorio absuelto, explicaron que ello lo era con ocasión de la relación de vecindad, pues aquella trabajaba como empleada del servicio doméstico de otra persona que habitaba cerca de su hogar. Además, recalcan que mientras perduró el contrato, sólo laboró un día por semana.

Del esclarecimiento de dichos aspectos depende en gran medida la viabilidad de la **sanción moratoria** deprecada, pues su prosperidad está inexorablemente atada a que se acredite que se adeuda algún haber, pues a voces de lo dispuesto por el art. 65 del CST, la sanción moratoria surge por el no pago de las prestaciones sociales debidas al fenecimiento del contrato, emolumento que la juez consideró satisfecho al tener en cuenta que lo pagado año a año superaba lo causado, por lo menos de cara a la prescripción declarada. *Contrario sensu*, si extendiésemos el extremo inicial y el número de días laborados por semana, habría prestaciones no satisfechas, por ejemplo en cuanto a las cesantías, dado que los recibos que reposan en el plenario, que dan cuenta de los pagos realizados a la trabajadora al finalizar cada año, cuya copia reposa a folios 53 a 60, lo son a partir del 2007, extremo inicial que tuvo en cuenta la falladora para cuantificar las condenas con base en la confesión realizada no sólo en el interrogatorio absuelto sino además al contestar la demanda.

Examinemos pues lo que en torno a estos tópicos nos ilustra la prueba testimonial.

Dicho medio estuvo compuesto por la declaración de 4 testigos. Ellos son:

El señor **JAIME CALLE ZAPATA**, si bien aduce conocer a la demandante hace 25 o 26 años porque es la suegra de su hermana y refiere ser conocedor desde esa época del vínculo cuyo extremo inicial aquí se discute, lo cierto es que ni siquiera identifica a las demandadas, desconoce su nombre, nunca las ha visto, las conoce como *las muchachas*, porque así se referían a las mismas y sabía que esa casa quedaba cerca del colegio San Carlos, por donde era el F2. Le consta lo que sabe por voces del hijo de la actora o por lo que aquella le contaba, es decir, no percibió de manera directa ningún hecho de los aquí discutidos, resultando poco ilustrativo para la Sala, de ahí que a pesar que exponga que a la actora le correspondía hacerle la alimentación y arreglarles la casa, que iba 3 días por semana, que la veía salir y regresar por la noche, o en alguna ocasión retornar antes porque se le quedaron las llaves, todo ello porque tenía un almacén cerca del domicilio de la demandante, lo cierto es que nada de sus dichos habrá de valorarse en los términos que lo pretende el recurrente, por la llana razón, que conforme el razonamiento realizado por la a quo, es un testigo de oídas.

Similar situación se predica respecto de la señora **LUZ ELENA POSADA VARGAS** quien claramente conoce a la demandante hace 20 años en razón de la vecindad, siendo enfática en que la misma le ayudó a obtener trabajo con el señor Iván Darío Restrepo, a quien identifica como un primo de las demandadas. Al igual que el anterior deponente, no conoce a las señoras Aura y Carmen Correa Eusse, tampoco sabe el nombre de *las muchachas*, ni ha ido a la casa de estas, sabe que quedaba por Belén, precisa que no era cerca de su sitio de trabajo ubicado por la 64. En tales circunstancias, aunque también es enfática en que la demandante laboraba 3 días donde dichas señoras, que incluso aquella dejó de trabajar porque le quitaron dos días y que el vínculo surgió desde 1989, al indagarla por la ciencia de sus dichos, sin dubitación alguna expresa que lo que sabe es porque la accionante se lo contó. Lo anterior al margen del hecho que dicha testigo, al preguntarle aspectos de su relación laboral con el que afirma es primo de las demandadas, pese a tratarse de hechos recientes, ni siquiera recuerda las fechas, mucho menos, habría de recordar, en gracia de discusión, datos específicos de una vecina. El único aspecto de su ponencia que resulta destacable, se relaciona con el hecho de que a voces de dicha testigo, la señora Rosa Elena Torres, contrario a lo referido por el recurrente, sí llegó a trabajar en otras casas de familia. En todo caso, ello no tiene importancia para el esclarecimiento de los puntos debatidos.

Respecto al señor **EFREN ECHEVERRI ALZATE**, último de los tres testigos traídos por la demandante, bastará con decir que sólo la conoce desde 2015, porque ella prestó servicios

temporales en su apartamento, ubicado en el barrio Santa Mónica, así que nada puede decir frente a lo sucedido entre las partes.

Por último, se escuchó a la señora **MARTA INES CORREA RESTREPO**, prima de las demandadas. Apoya la tesis de la parte resistente, al indicar que vio a la demandante dos veces laborando, no recuerda el año, pero precisa que fue posterior al 2010, e indica que como sus primas laboraban lejos, entonces tenían una persona que les colaborara una vez a la semana, lo sabe por las visitas o conversaciones familiares, ningún otro aspecto conoce, no tendría por qué hacerlo, dado que los testigos llamados a ilustrar a la Sala son aquellos que de alguna manera les conste el día a día del hogar conformado por las dos hermanas demandadas, para el caso inexistentes.

Bajo este panorama, sólo queda por remitirnos a los aspectos confesados en el interrogatorio de parte absuelto, máxime si nadie mejor que la parte conoce lo realmente acontecido, aunque, valga decirlo desde ya, a través de su declaración NO se busca probar un hecho, como parece entenderlo el recurrente, sino provocar una confesión.

Tenemos entonces a la señora **ROSA ELENA TORRES**. Aquella refiere tener unos 67 o 68 años, no lo recuerda, como tampoco el nombre de sus padres, o la dirección en la que vive, dice que estudió hasta tercero de primaria, pero nunca refiere no saber leer o escribir. Al indagarla por el extremo inicial señaló como tal el año 1968, data muy lejana al año 1989 que se aduce en la demanda. Todos estos aspectos de alguna forma denotan el deterioro normal de una persona en edad madura. Continúa señalando que para la época en que fue contratada, tres días por semana, las demandadas eran estudiantes pero no sabía cómo le pagaban, luego refiere que para ese momento también vivía un hermano de ellas que laboraba. Adujo que durante el *último año, o los últimos dos o tres meses*, sólo le tocaba ir un día por semana, y confiesa que se fue porque le quitaron días y que ante la liquidación guardaron silencio, que al finalizar el año le daban algo que ellas decían que era el aguinaldo y una prima y eso era todo, reconoce la firma que reposa en los recibos allegados donde consta el pago de las cesantías, pero es categórica es señalar que esa *no era la liquidación*, también acepta que al fenecer el vínculo recibió la visita de un señor dijo ser un abogado con un dinero, como \$250.000, como no quiso recibir nada, le dijo lo de la consignación en un juzgado. Añade que infructuosamente intentó comunicarse con las señoras Correa Eusse, pues cambiaron de teléfono.

Destáquese de lo dicho, como en medio del desconocimiento jurídico, la accionante acepta que recibía cesantías y prima, incluso un aguinaldo, pero insiste en que no le pagaban prestaciones,

aseveración que evidentemente queda sin soporte al observar los recibos allegados que dan cuenta de los emolumentos que a dicho título solían pagarse cada diciembre, y aunque en este punto le asiste razón al recurrente cuando afirma que no se encuentra el soporte correspondiente al año 2011, pues el del 2009 sí se haya en el plenario, lo cierto es que en uno u otro caso, a igual conclusión llegaría la Sala en cuanto a confirmar la decisión absolutoria respecto de la sanción moratoria deprecada, pues la demandante habría confesado que año a año recibía las cesantías.

En cuanto a los interrogatorios rendidos por las hermanas Correa Eusse, podría indicarse que en términos generales, y ahondando en algunos detalles, reiteraron lo ya expuesto en la contestación a la demanda, mostrándose un poco más conocedora de los hechos la señora Aura, quien al parecer era la encargada de entenderse con la demandante. Reiteran que el contrato era verbal, que la conocieron años atrás a su vinculación laboral por ser la empleada de una vecina, que laboraba un día por semana, elegido por aquella según su conveniencia e intereses, podía retirarse al culminar la labor aunque no hubiese finalizado la jornada, que solo ante una eventualidad era requerida un día adicional, lo que llegó a suceder en forma muy esporádica, que siempre cancelaban lo adeudado en dinero, nunca le consignaron, que nunca tuvieron problemas con la demandante, que incluso ni siquiera se enteraron que ya no trabajaría para ellas, que un día salió como cualquier otro, y al retornar lo fue con una citación en el Ministerio de Trabajo, diligencia en la que les dijo que no volvería.

De otro lado, se duele el recurrente de que las liquidaciones fueron realizadas por persona distinta a las firmantes. Ahora, sin entrarnos en discusiones grafológicas, simplemente habría de indicarse que no le resta veracidad y/o autenticidad a los documentos, por demás no tachados, el hecho de que fuesen elaborados a mano, simplemente dan cuenta de la existencia de unos pagos, aunado a que la demandante reconoció su firma.

También manifiesta el apoderado de la demandante en el recurso de alzada, que el no consignarse las cesantías acarrea una sanción.

Sabido es que abundante es la Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia relacionada con la procedencia de las **indemnizaciones moratorias, tanto la prevista en el Art. 65 del C. S. del Trabajo**, como aquella consagrada en el Art. 99 de la Ley 50 de 1990. La primera de ellas surge por el no pago de las prestaciones debidas al fenecimiento del contrato, la segunda, por la no consignación de las cesantías en un fondo dentro de los plazos establecidos en la ley.

Las mismas no proceden en forma automática, por lo que son las circunstancias de cada caso concreto las que permiten valorar las razones por las cuales el empleador **incumplió** con sus obligaciones, toda vez que en virtud del principio constitucional relacionado con la presunción de la buena fe, debe establecerse si del comportamiento de ese empleador incumplido puede predicarse lo contrario, es decir, la mala fe, y es necesario que las razones que plantee tengan la fuerza suficiente para justificar su incumplimiento y que además, sean probadas.

No desconoce la Sala la abundante jurisprudencia de nuestro órgano de cierre, que en torno al tema consideró lo que podría de alguna manera denominarse causales eximentes de dicha indemnización, donde se recopilan casos donde se infiere que el empleador actuó de buena fe. No obstante lo anterior, inocuo se torna referenciarlos o siquiera analizar la mala fe que predica el recurrente frente a las demandadas, especialmente por sus conocimientos en derecho, por cuanto, de un lado, como antes se analizó, NO se acreditó que se adeudara ningún monto a título de prestaciones sociales al fenecimiento del contrato, contexto bajo el cual NO es dable imponer la sanción moratoria, y de otro lado, la sanción consagrada en el Art. 99 de la Ley 50 de 1990, por la no consignación de las cesantías, NO fue objeto de súplica en el líbello genitor, hecho que impide a esta Magistratura examinar su procedencia.

Ahora, si a lo que se refería el recurrente era a la procedencia de la sanción contemplada en el art. 65 del CST, por adeudarse las cesantías, bajo el entendido que las mismas debieron consignarse y NO entregarse directamente a la trabajadora, habría de realizarse el siguiente análisis:

Por una parte, dispone el art. 254 del CST que:

“Se prohíbe a los patronos a efectuar pagos parciales del auxilio de cesantía antes de la terminación del contrato de trabajo, salvo en los casos expresamente autorizados, y si los efectuaren perderán las sumas pagadas, sin que puedan repetir lo pagado.”

Sin embargo, a juicio de la Sala la actitud asumida por las empleadoras, bajo ese panorama, encajaría en la buena fe, ya que si bien es cierto no consignaron las cesantías en Fondo, también lo es que no se quedaron con ellas, sino que las entregaron a la trabajadora, quien las recibió, sin ningún reparo.

Además de lo anterior no existe concurrencia entre la sanción por la entrega parcial de cesantías y la sanción por la no consignación de las mismas, criterio manejado de antaño por la Corte

Suprema de Justicia, entre las que se destacan la sentencia de radicación 27186 M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez, donde precisó que:

Esta última tiene por objeto y finalidad resarcir los perjuicios que el patrono haya podido causar al trabajador con el no pago oportuno de los salarios y prestaciones debidos, y en el caso del pago irregular de cesantía parcial ningún perjuicio se le ha ocasionado al trabajador cuando éste efectivamente ha recibido anticipos por ese concepto, de los cuales se ha usufructuado.

Y la misma corporación mediante providencia del 11 de diciembre de 1986, radicación 0284, reiteró tal entendimiento al señalar que:

“...la ignorancia de la ley no sirve de excusa... predicable tanto para el patrono como para el trabajador, y así resulta en el caso bajo examen, que si la actora recibió pagos que, se presume, sabía no se le podían hacer legalmente y los aprovecho sin hacer manifestación alguna, ello compensa la actitud a la vez ilegal del patrono al hacer un pago, que, se presume, conocía que era contrario a la ley. Entonces si hubo mala fe, esa mala fe fue compartida por uno y otro de los contratantes y, por consiguiente, no puede traer consecuencia benéficas para la trabajadora, que se lucra nuevamente, y perjudiciales para el patrono al ocasionarle el pago de la indemnización moratoria por deber cesantía, pues éste como ya se dijo, pagó al finalizar el contrato lo que creía deber...”

Ahora bien, al abordar en esta oportunidad igual temática, es oportuno precisar que las referidas sanciones no pueden concurrir coetáneamente y no es dable acumularlas, porque al realizar un análisis sistemático de los indicados preceptos, interesa recordar que en la interpretación de las normas laborales, debe tomarse en cuenta, esencialmente, su finalidad, esto es, la de lograr la justicia en la relación de trabajo, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, tal como explícitamente y de manera armónica lo señalan los artículos 1ª y 18 del Código Sustantivo del Trabajo; y en este caso particular, respecto de la indemnización moratoria, bastante se ha dicho por la Corte que únicamente procede cuando no se hayan brindado razones atendibles por el empleador para no pagar los salarios y prestaciones que debe al trabajador as la terminación del contrato, es decir media un análisis de la buena fe y, en cuanto al pago irregular de cesantías, tal actuar tiene sanción expresamente regulada, que lo es la pérdida de ese pago parcial por cesantías realizado de forma irregular; pero sin adicionalmente por sí misma genere indemnización moratoria”.

En este orden de ideas, no es dable castigar con igual rasero al empleador incumplido frente aquel que efectuó un pago, independientemente que mediara o no la autorización para efectuar su entrega, configurándose la causal eximente de la sanción deprecada al acreditarse la existencia de la buena fe, auxilio que como su nombre lo indica, es un ahorro obligatorio instituido por la ley que se capitaliza a favor del trabajador para servirle de soporte por algún tiempo, lo que en efecto sucedió, razón por la cual no son atendibles las razones esgrimidas por la parte actora, manteniéndose incólume la sentencia, respecto de los aspectos aquí analizados.

Ahora, pretende la demandante que se le reconozca la indemnización por **DESPIDO INJUSTO** al señalar en la demanda que se configuró un despido indirecto toda vez que RENUNCIÓ por el incumplimiento sistemático del empleador en materia de aportes a la seguridad social, obligación

que, valga decirlo desde ya, en efecto no se satisfizo durante los 7 años que perduró la relación laboral, pues así lo aceptó quienes se identificaron como empleadoras al contestar la demanda.

Empero, recordemos que en el interrogatorio absuelto por la demandante, otra fue la situación expuesta, dado que en otras palabras, dio a entender que renunció porque le disminuyeron los días que le correspondía laborar por semana, pasando de tres a cinco, teoría que ni siquiera coincide con la anotación realizada por la Dirección Territorial de Antioquia del Ministerio de Trabajo en el acto de no conciliación, véase folios 10 y 11 del expediente, cuando la reclamante aduce que el 22 de octubre de 2014 renunció por su estado de salud, renuncia que en uno u otro evento no es avalada por las demandadas, quienes únicamente refieren una especie de abandono de cargo, al señalar que la trabajadora salió como cualquier día y luego retorno pero con la citación del ente ministerial.

No obstante lo anterior, es dable recordar que si bien el auto despido producto de la renuncia del trabajador se configura cuando el empleador incurre en alguna de las causales previstas en literal b) del artículo 62 del CST, donde se contemplan las justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo por justa causa imputable al empleador, lo cierto es que su procedencia está inexorablemente sujeta a que el trabajador exteriorice su voluntad dirigida a finiquitar la relación contractual, exteriorización que se debe materializar **al momento del rompimiento del vínculo** contractual, informando al empleador con tanta oportunidad que no quede duda que la renuncia obedece realmente a los hechos alegados y no a otros distintos.

Significa ello que si la demandante pretendía que se analizará la viabilidad de tal indemnización, debió anexar la carta de renuncia llamada a acreditar no sólo de quién provino la decisión, sino además las razones que la sustentaban, para el caso inexistentes, sin que se pueda valer el recurrente del grado de formación de la accionante, mucho menos un analfabetismo no acreditado.

Sobre el tema del despido indirecto, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en sentencias como la de radicación 13648 de 2001, 42057 de 2014, 64.659 de 2018, última en la que precisó que:

“...quien dimite de un empleo tiene pleno derecho para redactar a su albedrío la comunicación correspondiente. También tiene adoctrinado que la carta de **terminación debe contener las razones o motivos aducidos por el empleador o trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo**, lo cual no significa que los hechos en ella expuestos hayan ocurrido de esa manera. Entonces, el escrito prueba la terminación unilateral del contrato de trabajo, pero no la justificación del mismo y es el juez, por el

sendero procesal, quien determina si los supuestos fácticos en que se funda la decisión constituyen o no justa causa.”

Como es el trabajador quien exterioriza una voluntad dirigida a finiquitar la relación contractual, es quien corre con toda la carga de demostrar que su voluntad se vio afectada por actos de su empleador tendientes a obtener su renuncia y que, por lo tanto, es el verdadero gestor de la terminación de contrato, caso en el cual se estaría frente a una renuncia inducida o constreñida.

No obstante lo anterior, tal y como lo advirtió la falladora, es evidente que existe una grave falencia de la parte actora que deviene en el fracaso de la súplica impetrada por el recurrente, toda vez que si no allegó la carta de renuncia, releva al operador jurídico de la posibilidad de analizar la configuración de un despido indirecto.

Bajo este panorama, si bien medio un sistemático incumplimiento del empleador de sus obligaciones en materia de seguridad social, en parte alguna se demostró que ello fundara la renuncia de la trabajadora, razón por la que se mantendrá en este aspecto la decisión adoptada en primera instancia.

Finalmente nos atañe examinar la inconformidad del recurrente en cuanto al NO pronunciamiento por parte de la juez de **los aportes** que corresponden tanto al **sistema de salud como al de riesgos laborales**.

Tenemos que en materia de seguridad social, una de las principales obligaciones del empleador, a la luz de lo normado en el art. 22 de la Ley 100 de 1996, es la de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social, en salud, pensiones y riesgos laborales, así como la de efectuar las cotizaciones oportunamente dentro de los plazos establecidos en la ley, las que se deben hacer con base en el salario devengado por el trabajador, atendiendo a los parámetros señalados en los artículos 127 a 130 del CST.

No obstante lo anterior, nuestro órgano de cierre ha sido claro al enfatizar que NO es dable ordenar el pago directo al trabajador de los aportes correspondientes a salud y riesgos laborales que en su oportunidad no efectuó el empleador por falta de afiliación, aspecto en el que el recurrente también centró su inconformidad. Si bien la juez no se pronunció frente a este aspecto, habrá de entenderse que la absolución aludida por la falladora, abarca también estos ítems.

Consúltense para el efecto las sentencias de radicación 54.850 de 2018, 59.882 y 67.630 ambas de 2019, última oportunidad en la que rememorando lo razonado en la SL3009-2017, precisó que

no procedían dichos pagos, toda vez que frente al hecho consumado de la no afiliación a las contingencias de salud y riesgos laborales, lo dable era ordenar la reparación de perjuicios que el trabajador hubiese acreditado sufrir por la omisión del empleador, o el reintegro de los gastos que se vio obligado a llevar a cabo por no tener la atención y cubrimiento de tales riesgos.

En tal sentido, si bien el empleador NO se subrogó en las obligaciones económicas que en caso de mediar una afiliación hubiesen estado a cargo de la EPS o ARL, es decir, del subsistema de salud y de riesgos laborales en caso de haberlo requerido el trabajador, lo cierto es que NO se acreditó un daño a la salud que irrogara pago alguno, o un perjuicio por la falta de afiliación, como tampoco que se hubiera dado erogación alguna por parte de la demandante por estos conceptos.

En consecuencia, conforme los razonamientos que preceden, la decisión objeto del recurso de alzada será **CONFIRMADA** en su integridad, por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han proferido en torno al tema

Se condenará en costas en esta instancia a la parte actora por no haber tenido éxito en el recurso, fijándose como agencias en derecho la suma de \$100.000 a cargo de la demandante y a favor de cada una de las accionadas.

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 11 de julio de 2016 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral promovido por **ROSA ELENA TORRES** contra las señoras **AURA ROSA CORREA EUSE** y **MARÍA DEL CARMEN CORREA EUSE**, identificadas con la cédula de ciudadanía Nro. 43.019.609, 22.209.700 y 22.209.812, respectivamente, por las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia.

SEGUNDO: costas en esta instancia a cargo de la parte actora. Se fija como agencias en derecho la suma de \$100.000 a favor de cada una de las accionadas.

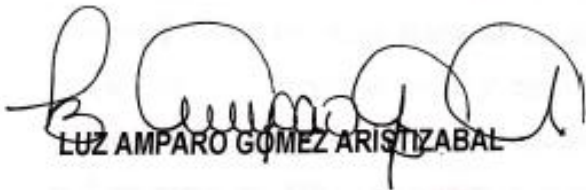
Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

(firmas escaneadas)

Los Magistrados,



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por
ESTADOS No. 096 fijados hoy en la secretaría de
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 23 de JULIO DE 2020

Secretario